

# ÍNDICE

Presentación .....	VII
Agradecimientos .....	IX
1. Las Fuerzas Armadas y las memorias de la re- presión en el Cono Sur .....	1
FELIPE AGÜERO Y ERIC HERSHBERG	
2. Entre la memoria y el olvido: las luchas por la memoria en el discurso militar uruguayo, 1976- 2001 .....	35
MARIANA ACHUGAR	
3. Bomba en Ríocentro: militares y otras memorias	71
PRISCILA ANTUNES	
4. Savia nueva de un árbol eterno. Ejército, jóve- nes y memoria en la Escuela Militar (Chile, 1971-2002) .....	107
MARÍA EVA MUZZOPAPPA	
5. Represión y Represión: memorias, política mili- tar y estrategias institucionales en la Gendar- mería Nacional Argentina .....	143
DIEGO ESCOLAR	
6. Vencedores vencidos: las respuestas militares frente a los informes «Nunca Más» en el Cono Sur .....	175
ALDO MARCHESI	

# 1. LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS MEMORIAS DE LA REPRESIÓN EN EL CONO SUR <sup>1</sup>

Felipe Agüero y Eric Hershberg

## I. OBJETIVOS GENERALES

Este libro trata sólo en parte de las Fuerzas Armadas de América Latina. Cada capítulo aborda aspectos relacionados con los militares: su discurso y memorias, diversas versiones de experiencias pasadas, recuentos de su propia historia. Pero, al mismo tiempo, busca arrojar luz sobre el modo en que las instituciones se posicionan frente a los debates que la sociedad mantiene acerca de las desgarradoras experiencias recientes de violencia política, y que continúan siendo motivo de disputa, incluyendo las cuestiones de culpa y responsabilidad. El libro también intenta revelar de qué manera las instituciones, que a veces no difieren mucho de los individuos en su accionar, buscan formular narrativas plausibles acerca de sí mismas y del rumbo de los controvertidos acontecimientos en los cuales ellas mismas tuvieron un papel destacado. Estos conflictos de interpretación y sentido pueden tener consecuencias determinantes: la obtención de justicia para las víctimas o largos años de prisión para los culpables, la reivindicación de una postura, o su condena. Así, entonces, las batallas se libran con pasión y convicción, y

---

<sup>1</sup> Por Cono Sur entendemos cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, el análisis en este libro no abarca el caso paraguayo, no por despreciar su importancia, sino por las notables diferencias temporales con respecto a la alternancia democracia y dictadura. Sin embargo, esperamos que nuestras observaciones puedan ser válidas para otros contextos, tanto en la región latinoamericana como en otras latitudes.

con una dosis nada desdeñable de cálculo estratégico, aun si las estrategias a veces resulten inoportunas, mal concebidas o reñidas con la realidad. Por todo esto, aparte de sus contribuciones descriptivas y analíticas, los capítulos contenidos en el libro atraerán el interés del lector.

Ésta es asimismo una serie de ensayos acerca de la negociación de significados que tiene lugar a diario tanto en dictadura como en democracia. En este sentido, el libro analiza cómo las instituciones buscan (re-)definir y (re-)proteger su posición bajo regímenes políticos cuya principal pretensión de legitimidad ha consistido en representar la antítesis de aquellos que los habían precedido. En otras palabras, nos interesa comprender cómo las instituciones militares construyeron la memoria de los regímenes autoritarios y de sus orígenes; regímenes que, según ellas, salvaron a la nación de graves peligros, y cómo fue que luego reformularon sus versiones del pasado cuando las dictaduras de las que tanto se habían enorgullecido fueron acusadas de cometer atrocidades. ¿Cómo fueron diferenciándose las memorias que se han construido sobre esos regímenes? ¿Cómo evolucionaron a través del tiempo para adaptarse a circunstancias cambiantes? ¿De qué manera difundieron las Fuerzas Armadas su versión del pasado entre las nuevas generaciones, tanto dentro de sus propias filas como entre la población en general? Esperamos poder arrojar algo de luz sobre el modo en que las diferentes estrategias de contar y rememorar el pasado fueron variando a medida que se enfrentaban con factores exógenos, tales como la proclamación o derogación de las leyes de amnistía, y otros endógenos, tales como cambios en la percepción militar del papel de las Fuerzas Armadas en coyunturas críticas de la historia nacional, o en la forma de caracterizar a víctimas y opositores. Se trata, entonces, de poner atención a la construcción de la subjetividad de los individuos, y de cómo esa construcción se traduce en escenarios institucionales, para lanzarse desde allí al ámbito más extenso del discurso público.

Las Fuerzas Armadas se prestan bien para nuestro intento de comprender procesos y contextos más amplios, desde los rasgos contradictorios que exhiben como organización compleja. Por una parte, son organizaciones rígidas, dotadas de un claro senti-

do de sus límites y de la misión que les compete. En su calidad de portadoras de mitos nacionales —y nacionalistas— son instituciones que se distinguen por ser productoras y transmisoras de memoria, interesadas en dar continuidad a una visión tradicional de la construcción y unificación nacional. Además, como agentes transmisores del sentimiento patriótico, invariablemente enfatizan la debida socialización de sus cuadros así como los de la ciudadanía en general. Sin embargo, los militares provienen de todos los estratos de la sociedad —al menos en teoría— lo cual, sumado a su determinación de sobrevivir como organización a cualquier costo, los hace particularmente sensibles a los cambios contextuales. Ya sea mediante las armas o en el terreno de la opinión pública, las instituciones aprenden rápidamente y pueden modificar su orientación estratégica ante circunstancias y relaciones de poder cambiantes entre fuerzas opuestas. De esta manera, un enfoque sobre los militares puede ayudar a entender cambios y continuidades en la memoria colectiva de la represión, y de sus agudos conflictos, que afectó a los países del Cono Sur durante las décadas que se extienden desde mediados de los años sesenta hasta principios de los años noventa.

Nuestro libro se inspira en parte en el gran sociólogo C. Wright Mills, quien nos recuerda que los estudios de caso enfocados en individuos o instituciones concretas pueden resultar de gran utilidad, no necesariamente como fin en sí mismos sino más bien como herramientas destinadas a revelar una lógica más profunda de la condición humana, así como los caminos utilizados por actores e instituciones para modelar el rumbo de los asuntos colectivos<sup>2</sup>. Va de suyo que, en democracia o en dictadura, las Fuerzas Armadas y los hombres y mujeres que las integran suelen ocupar posiciones clave dentro de la jerarquía social y política, por lo que la comprensión de sus papeles en un contexto determinado constituirá un aporte útil de por sí. Es en este sentido, entonces, que el libro efectivamente trata de las Fuerzas Armadas tanto como de la dictadura y de la democracia, y no

---

<sup>2</sup> C. Wright Mills, *The Sociological Imagination*, Nueva York, Oxford University Press 2000/1959, capítulo 1.

meramente acerca de las prácticas y los modos de discurso que conforman la vida de las instituciones e individuos que operan en los diferentes regímenes.

## II. LA CONFLICTIVA Y NUNCA ACABADA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA<sup>3</sup>

Las posturas de los movimientos de derechos humanos son relativamente bien conocidas. Ellas enfatizan la responsabilidad de los individuos y de las instituciones que violaron tales derechos, demandando verdad, justicia y reparación. La perspectiva es ciertamente diferente para quienes optaron por la riesgosa decisión de interrumpir el orden constitucional de cada uno de los cuatro países que nos ocupan. Para estos actores, lo que se jugaba era ni más ni menos que el futuro de la nación ante las amenazas (a veces percibidas como internas; a menudo calificadas como externas) que se cernían sobre la unidad o los objetivos nacionales.

Invariablemente, estas amenazas son presentadas como el punto nodal del contexto que precede a la toma del poder por los militares y, hasta el día de hoy, con algunas excepciones, suele decirse que el accionar de las Fuerzas Armadas fue justificado, y hasta heroico. En el interior de las instituciones militares, la defensa de la toma del poder se complementa con la insistencia en la responsabilidad institucional que les cupo en la preservación de la integridad de las Fuerzas Armadas como tales, vulnerables a enemigos externos —el comunismo, por ejemplo— que, operando a través de agentes domésticos, aprovechaban los espacios que les eran proporcionados por sistemas políticos débiles y corruptos en manos civiles. Con frecuencia, el recuerdo de lo ocurrido o, más específicamente, del *por qué* se decidió la interven-

---

<sup>3</sup> Aquí tomamos prestado el notable título del excelente libro de Norbert Lechner, *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*, Santiago, FLACSO, 1986.

ción, hace referencia explícita a la violencia de la que fueron objeto militares y otros defensores de los intereses nacionales dentro de un marco percibido como equivalente a un estado de guerra. Y la guerra, por supuesto, siempre trae aparejados daños colaterales que, por mucho que se intenten minimizar, no pueden evitarse. Según esta línea de razonamiento, por más que el cambiante clima político y cultural le reste cada vez más espacios de legitimidad, tampoco puede culpabilizarse a los soldados ni a sus bien intencionados superiores por las consecuencias inevitables de sus esfuerzos en defensa de la nación.

Los interrogantes que surgen no son en modo alguno privativos de la región. ¿Cómo es que las sociedades activan su memoria? ¿De qué manera tanto la gente como las instituciones lo hacen de un modo que forja identidades individuales y colectivas, y establece límites entre las categorías de «nosotros» y «ellos»? ¿Mediante qué mecanismos los actores sociales y políticos intervienen en las disputas sobre la memoria, y cómo terminan éstas canalizándose y reflejándose en instituciones, normas y políticas, que finalmente influyen en la forma en que se moldea la memoria colectiva? ¿De qué manera las disputas acerca de la naturaleza e importancia de la memoria misma influyen sobre las identidades y motivan actitudes y conductas? ¿Cuáles son las visiones compartidas por la sociedad respecto de la memoria, de la importancia de enfrentar —o acallar— un pasado que evoca sentimientos de angustia, conflicto y resentimiento?

Las respuestas a estas preguntas deben considerar la multiplicidad de memorias y los diferentes significados que engendran. La investigación debe disponerse de tal modo que abarque no sólo la perspectiva de las víctimas sino también el punto de vista de los represores, aun si la reflexión sobre las acciones de estos últimos puede resultar ética y políticamente penosa. Una comprensión satisfactoria de la memoria social no puede surgir del análisis de la cultura a expensas de la exclusión de las instituciones, ni tampoco de las prácticas y de las normas con exclusión de identidades y subjetividades. El desafío intelectual consiste precisamente en conectar estas dicotomías, infundiéndoles la tensión y ambivalencia propias de los procesos que tienen lugar en el mundo real. Ahora es el momento oportuno de encarar

esta agenda en el Cono Sur, puesto que a pesar de la persistencia de los conflictos que rodean el tema de la memoria, y quizás por eso mismo, el trabajo académico sobre este tema en la región ha sido relativamente escaso.

Al igual que en otras series de ensayos publicadas en la colección de Siglo XXI del que este libro es parte, nos preocupa menos precisar lo que *realmente sucedió* que la naturaleza de los conflictos que resultan de *cómo definir y relatar* aquello que ocurrió. Al abordar estos procesos nos encontramos con las estrategias utilizadas por los distintos actores al tratar de proyectar su versión de lo ocurrido en el pasado sobre los debates contemporáneos, así como la manera en que caracterizan ese pasado de tal manera que sirva sus propósitos de cara al futuro. En otras palabras, las batallas acerca del papel que desempeñaron los militares en hechos represivos que tuvieron lugar hace ya algún tiempo tienen que ver, en gran medida, con el rol que se piensa para las Fuerzas Armadas y sus integrantes en la sociedad de nuestros días. ¿Es una institución a honrar, a la cual puede confiársele el cumplimiento cabal de sus misiones, o constituye un objeto de escarnio, un actor a ser repudiado o rechazado como símbolo del Estado y la nación? ¿Son sus integrantes servidores públicos o funcionarios privilegiados a los cuales se debe controlar y temer? ¿Cómo es que, a través del tiempo, la forma de ver estos interrogantes ha ido modificándose entre los diversos grupos políticos y sociales en respuesta a cambios experimentados en la política interna e internacional? Éstas son algunas de las preguntas que los ensayos incluidos aquí intentan esclarecer.

### III. INTENTOS RECIENTES DE REPOSICIONAMIENTO O REAFIRMACIÓN

Estas preguntas, que informan analíticamente los estudios que aquí se presentan, han estado también en el centro de la agenda política y debates que muy recientemente han enfrentado actores militares, de gobierno y de la sociedad civil en varios de los casos bajo estudio. En Argentina, por ejemplo, el gobierno de

Kirchner reavivó la discusión sobre los crímenes de la dictadura militar al promover, desde mediados de 2003, las medidas que finalmente condujeron a la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final que las Fuerzas Armadas forzaran a aprobar durante el gobierno del presidente Alfonsín. También desarrolló iniciativas de fuerte contenido simbólico como el anuncio, en marzo de 2004, de la creación de un museo de la memoria en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el sitio más emblemático de las violaciones a los derechos humanos en ese país<sup>4</sup>. La ceremonia del anuncio, realizada en la misma ESMA, estuvo inmediatamente precedida por el descuelgue de los cuadros de miembros de la Junta Militar que aún decoraban las paredes del Colegio Militar, acto que provocó la renuncia de cuatro generales<sup>5</sup>. Unas semanas antes el gobierno había animado al jefe de la Armada a admitir en discurso público que el recinto de la ESMA había sido «utilizado para la ejecución de hechos calificados como aberrantes y agraviantes de la dignidad humana, la ética, la ley, para acabar convirtiéndose en un símbolo de barbarie e irracionalidad»<sup>6</sup>. De este modo, el almirante Jorge Godoy se sumaba a las declaraciones que nueve años antes había hecho el entonces jefe del Ejército, general Martín Balza, asumiendo responsabilidad por los crímenes de la dictadura: «quiero decirles como Jefe del Ejército que, asegurando su continuidad histórica como institución de la Nación, asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores de esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover»<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> El desarrollo del museo ha estado a cargo del proyecto Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en el que participan funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y de las oficinas de derechos humanos y justicia del gobierno. El proyecto contempla, entre otras iniciativas, la creación del Museo del Terrorismo de Estado.

<sup>5</sup> La Nación Line ([www.lanacion.com.ar](http://www.lanacion.com.ar)), 24 y 25 de marzo de 2004.

<sup>6</sup> La Nación Line, 3 de marzo de 2004.

<sup>7</sup> En un intento por explicar esos errores, Balza señalaba que «El Ejército instruido y adiestrado para la guerra clásica, no supo cómo enfrentar desde la ley plena al terrorismo demencial. Este error llevó a privilegiar la individualización del adversario, su ubicación por encima de la dignidad, mediante la

En Brasil, la publicación en octubre de 2004 de una fotografía de Vladimir Herzog en prisión que desmentía de una pluma las versiones que el ejército siempre mantuvo sobre la muerte del conocido periodista en una prisión militar en 1975, dio lugar a una declaración oficial y pública del Ejército en la que volvía a justificar su conducta de entonces como «una legítima respuesta a la violencia de los que desecharon el diálogo». La declaración, que no había sido consultada con el gobierno, también afirmaba que «el movimiento de 1964, fruto del clamor popular, creó, sin dudas, condiciones para la construcción de un nuevo Brasil, en un ambiente de paz y seguridad». Los asesores del presidente estimaron que el Ejército se comportaba como si estuviese en el poder y que la desautorizada nota revelaba la falta de control por parte del ministro de Defensa, que debió abandonar el cargo <sup>8</sup>.

En Chile, ha sido el mismo Ejército el que bajo el mando del general Cheyre perfiló una posición de distanciamiento del legado de la dictadura. Ya con ocasión del 30º aniversario del golpe de Estado de 1973 Cheyre había señalado que el Ejército no era heredero del legado del régimen militar. Y, más tarde, anticipándose a la divulgación en noviembre de 2004 del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, admitió, por primera vez, responsabilidad institucional en la violación de

---

obtención, en algunos casos, de esa información por métodos ilegítimos, llegando incluso a la supresión de la vida, confundiendo el camino que lleva a todo fin justo, y que pasa por el empleo de medios justos. Una vez más reitero: el fin nunca justifica los medios». Éstos son extractos de una declaración que el general Balza leyó en Tiempo Nuevo, un programa de televisión de Bernardo Neustadt, el 25 de abril de 1995 y que fue reproducido en el diario *Clarín*, 26 de abril de 1995.

<sup>8</sup> El texto del ejército señalaba: «as medidas tomadas pelas Forças Legais foram uma legítima resposta à violência dos que recusaram o diálogo, optaram pelo radicalismo e pela ilegalidade e tomaram a iniciativa de pegar em armas e desencadear ações criminosas». También se afirmaba allí que «o movimento de 1964, fruto de clamor popular, criou, sem dúvidas, condições para a construção de um novo Brasil, em ambiente de paz e segurança», *Folha de S. Paulo*, terça-feira, 19 octubre 2004.

derechos humanos<sup>9</sup>, y proclamó una revalorización de esos derechos así como «un reposicionamiento en la sociedad —a la cual nos debemos y servimos— buscando una mayor cercanía que nos haga ser percibidos como una institución de todos los chilenos»<sup>10</sup>. También tomó el Ejército iniciativas de alto contenido simbólico, como fue, por ejemplo, el sepelio oficial con honores al ex comandante en jefe Carlos Prats, realizado el 30 de septiembre de 2004, exactamente en el 30° aniversario de su asesinato en Buenos Aires por agentes de la dictadura militar chilena, honores que ésta siempre le negó. La ceremonia, producto de «una decisión institucional vinculada al honor militar» y que, según el jefe del Ejército, «regresa a su sitio lo que no debió estar separado de la historia militar de las últimas tres décadas», fue vista por él como un desafío al tiempo, para «impedir que éste haga una maniobra tan corrosiva de la memoria que nos impida reali-

---

<sup>9</sup> «El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse», Ejército de Chile, «El Fin de una Visión», 5 de noviembre de 2004. [www.ejercito.cl](http://www.ejercito.cl)

<sup>10</sup> *Ibid.* La Armada también acusó un cambio de posición, acogiendo con «generosidad y cristiana humildad» el informe, aceptando «como verdaderos todos los testimonios», ...cuya «lectura es impactante y conmovedora, y nadie podría desconocer que en Chile se violaron gravemente los Derechos Humanos y la dignidad de muchas personas inocentes, por parte de agentes del Estado» incluyendo «algunos miembros de la Armada [que] desviándose de la recta doctrina, también participaron en los luctuosos hechos...». Sin embargo, la declaración enfatizó que «la violación de los derechos humanos nunca ha sido una política institucional». Ver *La Segunda*, 30 de noviembre de 2004.

zar la pendiente reflexión sobre la época y las circunstancias que rodearon la vida del general Carlos Prats González»<sup>11</sup>.

Las declaraciones y episodios reseñados revelan claramente esfuerzos deliberados por mantener o recomponer una idea sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la historia reciente, por precisar los elementos con que se querrá socializar a las nuevas generaciones de soldados y oficiales, por influir en la visión que la sociedad tenga sobre las Fuerzas Armadas. Se trata, entonces, de esfuerzos por afirmar o recomponer una cierta identidad de las Fuerzas Armadas, de definir desde el presente los contenidos de lo que será la historia y las tradiciones militares y nacionales.

Es evidente que tanto el sentido como la intensidad, agencia y oportunidad de estos esfuerzos han variado según el país. En Brasil, ellos han ido en la dirección de reafirmar las orientaciones del pasado y han emergido sólo esporádicamente, en reacción a estímulos del entorno<sup>12</sup> y han emergido sólo esporádicamente, en reacción a estímulos del entorno. En Argentina, los esfuerzos se han encaminado al repudio y a la memoria de los crímenes de la dictadura, bajo la presión de las nuevas autoridades políticas que asumieron el 2003, retomando anteriores tendencias como la iniciada por Balza. En Chile, el distanciamiento del Ejército respecto de la dictadura ha sido consecuencia de procesos internos en el Ejército, alentados por desarrollos contextuales, en particular por la pérdida de apoyos sociales y políticos y los estímulos proporcionados desde el gobierno. Estas diferencias se afirman, al menos en parte, como sugeriremos más adelante, en las peculiaridades de sus procesos de transición.

En cualquier caso, estos intentos de afirmación o redefinición de identidades son bastante recientes, y podrán ser indicios, según los intereses y acciones de actores sociales y políticos, así como de las propias Fuerzas Armadas, de actividades más duraderas de definición de identidad y selección de tradiciones. Pero

---

<sup>11</sup> Discurso Fúnebre del Comandante en Jefe del Ejército en las Exequias del GDE Carlos Prats González, Santiago, 30 de septiembre de 2004.

<sup>12</sup> Rafael Cariello, «Elogio de 64 ainda forma elite do Exército», *Folha Brasil*, 14 de noviembre de 2004.

no hay duda acerca del impacto que estas tendencias tendrán en la forma como la sociedad resuelva sus problemas de construcción de memoria, dadas la centralidad de las Fuerzas Armadas y el peso de su papel formativo y de transmisor de tradiciones.

Es interesante aquí referirse ilustrativamente al caso del Ejército alemán occidental de la posguerra, pues fue una de las instituciones que más intensamente experimentó debates acerca de cuáles serían los contenidos de su memoria institucional, debates que apuntaban al centro de la tensión entre tradición y el imperativo de construcción de una nueva identidad. Según Mark J. Osiel, el rasgo más notable de la manera en que los militares alemanes occidentales de la posguerra abordaron la cuestión de la memoria colectiva fue el vigoroso debate público que se prolongó por muchos años y que involucró a todas las partes interesadas<sup>13</sup>. Hay que notar que el contexto era completamente distinto del latinoamericano porque, entre otras importantes razones, se trataba de un debate iniciado desde las autoridades democráticas e involucraban a un Ejército fuertemente sometido al control político de un gobierno cimentado en instituciones que surgieron de la ocupación aliada. Pero la alusión es de todos modos relevante pues revela cómo las Fuerzas Armadas pueden protagonizar un debate que en verdad sintetiza o, a veces, reemplaza, un debate que compete a toda la sociedad.

La pregunta central, según el trabajo de Osiel, fue: ¿Cómo podría el Ejército alemán, que venía saliendo de un execrable pasado reciente, construir unas tradiciones necesarias para su propio y necesario sentido de identidad en la nueva democracia? Fueron las autoridades democráticas quienes intentaron desarrollar una nueva tradición, rescatando figuras heroicas (como los oficiales que atentaron contra Hitler), promulgando «decretos de tradición», y revisando las «nuevas» tradiciones conforme a los resultados de la investigación histórica. Esto generó controversias acerca de la virtud y eficacia de desarrollar tradiciones por decreto, cuestión que fue en la práctica resuelta por el debate y la

---

<sup>13</sup> Mark J. Osiel, «Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 144, 1995, p. 698.

sucesión de cambiantes posturas sobre esas tradiciones, debate en que se involucró plenamente el propio Ejército. Al final las versiones sobre la tradición a construir fueron el resultado de varios compromisos que armonizaban visiones contrapuestas. Un decreto de 1965 estipulaba, por ejemplo, que «La tradición es el traspaso de la herencia válida del pasado. La mantención de la tradición es parte de la educación militar. Abre el camino a ejemplos históricos, experiencias y símbolos; debiera capacitar al soldado a entender mejor y cumplir su misión hoy y mañana». Este decreto, de compromiso, había ya eliminado la presencia activa de aquellos héroes brevemente resucitados como los del atentado a Hitler. No obstante, según Osiel, el decreto enfatizó que las memorias y tradiciones militares debían, para persistir en el tiempo, procurar su compatibilidad con principios occidentales universales expresados en el derecho constitucional e internacional. Una de sus cláusulas señalaba que «la medida para la comprensión y mantención de la tradición es la Constitución y las tareas y obligaciones que le asigna a la *Bundeswehr*. La Constitución es la respuesta a la historia alemana». Otra cláusula señalaba que «los deberes del soldado —lealtad, valentía, obediencia y camaradería— alcanzan su altura moral en nuestro tiempo al adscribirse a la Constitución»<sup>14</sup>.

El enfoque de Osiel sobre tradición y memoria en el caso del Ejército alemán occidental destaca el papel del debate amplio y abierto sobre esas cuestiones. Es ese mismo debate, más que decretos especiales, el que va generando una tradición y una memoria, debate que es potenciado a partir de actos simbólicos y sustantivos como los resultados de un gran juicio o de los trabajos de las comisiones de la verdad. Pero ese debate no es producto de actos espontáneos sino, al contrario, es inducido y organizado. Otro elemento que se destaca en ese caso es el intento de cruzar la brecha entre tradición e identidad institucional, sociedad civil y democracia, mediante el conducto de la incorporación y socialización de preceptos constitucionales y valores cristalizados en el derecho internacional.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, pp. 696-697.

La experiencia de la posguerra alemana es, sin duda, diferente a la de la postransición en América Latina, especialmente en lo que concierne a las Fuerzas Armadas. En esta última región nunca han estado las Fuerzas Armadas sometidas a tan intenso, abierto y explícito debate acerca de la memoria y la construcción de nuevas identidades. No obstante, los desarrollos recientes indican que, de acuerdo a las posibilidades y limitaciones de cada caso, ese debate ha comenzado a tener lugar, cimentando lo que podrá ser, en algunos casos, una reflexión más persistente y duradera, involucrando a otros actores relevantes en las nuevas democracias.

El resto de este capítulo introductorio amplía los breves comentarios precedentes respecto del papel de los militares en el derrocamiento de los regímenes democráticos en las décadas de los años sesenta y setenta así como en las violaciones de los derechos humanos en los años en que estuvieron en el poder. Nos interesan aquí las *historias*, aparte de las múltiples y contradictorias *memorias* de los diversos actores. Volveremos a éstas sólo después de haber completado el cuadro acerca de cómo, en cada uno de los casos, los militares enfrentaron el proceso inicial de cambio de régimen que trajo aparejado el retorno de los gobiernos civiles en la región. El capítulo finaliza con una serie de reflexiones comparadas, con especial atención al proceso interactivo que se desarrolla entre sociedad y Fuerzas Armadas en la construcción de una memoria, y particularmente al papel de los militares en las violaciones de los derechos humanos y la respuesta a aquellos hechos ahora que los países estudiados aquí están bajo regímenes democráticos.

#### IV. ANTECEDENTES, DICTADURAS Y TRANSICIÓN: DESDE LOS GOLPES MILITARES HASTA LA CRÍTICA RECIENTE DE LA REPRESIÓN

Las transiciones de los años ochenta hacia los gobiernos civiles marcaron el fin de una época traumática para los países del Cono Sur, en la que las violaciones de los derechos humanos

afectaron a decenas de miles de personas y fomentaron una «cultura del miedo» que atravesó los intercambios sociales a casi todos los niveles<sup>15</sup>. Aunque incompleta, existe una considerable documentación que da cuenta del alcance de las desapariciones y secuestros por motivaciones políticas, de los asesinatos y las torturas a disidentes, de los arrestos arbitrarios, del exilio y una letanía de otras violaciones que sojuzgaron a los países de la región durante períodos variables que se iniciaron en 1964 con el golpe de Estado en Brasil. Felizmente estos fenómenos hoy forman parte del pasado autoritario, y comienzan a ser objeto de estudio más para el historiador contemporáneo que para el analista de la actualidad política. Pero, si bien el ciudadano común ya no vive sumido en el miedo a la represión de los organismos del Estado, las violaciones de los derechos humanos continúan ocupando un lugar central en la política contemporánea de la región. Las comisiones de la verdad convocadas para investigar esas violaciones y para arribar a versiones consensuadas del pasado han obtenido algunos logros importantes, pero ni sus hallazgos ni las subsiguientes acciones judiciales que tuvieron lugar en algunos países llegaron a darle un cierre al problema. Las amnistías otorgadas a violadores de los derechos humanos —civiles y militares— continúan provocando protestas por parte de las víctimas, de sus familias y defensores, y de amplios sectores de la sociedad para los que el lema «Nunca más» significa tanto una demanda de explicación exhaustiva de lo ocurrido como el castigo correspondiente a los represores. Por su parte, y hasta no hace mucho, los poderes del Estado mostraron poca inclinación por revisar las dolorosas experiencias de la represión desatada por el autoritarismo. Especialmente durante los primeros años de gobierno democrático, la preocupación de los grupos dirigentes sobre la gobernabilidad los impulsó a evitar discusiones divisionistas respecto del pasado. Más recientemente, sin embargo, se han revitalizado los movimientos en pos de la necesidad de compensar a las víctimas, castigar a los represores y reconocer

---

<sup>15</sup> Juan Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Antonio Garreton, *Fear at the Edge*, University of California Press, 1992.

públicamente desde las instituciones que los crímenes en verdad existieron y no deben repetirse jamás.

Hoy, al igual que cuando se reinstauraron los regímenes democráticos, las disputas sobre cómo manejar el pasado todavía giran en torno de las versiones sobre qué ocurrió exactamente bajo las dictaduras y, al mismo tiempo, pretenden dirimir la mejor manera de situar lo sucedido en el contexto de los procesos sociales y políticos que tuvieron lugar. Las páginas siguientes examinan dichas cuestiones en cada uno de los cuatro países objeto de este análisis, con énfasis en la perspectiva militar.

Los militares brasileños, cuando derrocaron el gobierno de Goulart en 1964, inaugurando así la nueva era de regímenes autoritarios, no se concebían como los destructores de la democracia. Tal como lo indicara Juan Linz, la democracia como régimen de gobierno había logrado tal legitimidad que, aun si un gobierno democrático era expulsado por la violencia, el hecho debía justificarse bajo la necesidad de salvar a la democracia de sus enemigos<sup>16</sup>. Atrapados en la atmósfera de la Guerra Fría, la defensa de la civilización occidental y cristiana y la salvación nacional llegaron a tomar precedencia sobre la defensa de gobiernos democráticos específicos. Todos los golpes de Estado que se unieron al movimiento autoritario que cubrió la región recurrieron a la misma lógica.

Llamamos «nueva» a esta era porque surgió de la acción conjunta de todos los servicios armados bajo sus respectivos mandos, quienes constituyeron Juntas de Gobierno, que en nada se parecían a golpes de Estado anteriores, que respondían a la ambición de algunos oficiales medios y expresaban efímeras alianzas entre civiles y militares o de dirigentes populistas apoyados por militares. Las nuevas Juntas tenían propósitos fundacionales, entre los que figuraban la reconversión de la economía y de las estructuras políticas. A menudo los mismos militares no eran plenamente conscientes de la naturaleza de las alianzas que lideraban ni de la envergadura de las políticas que patrocinarían: fue

---

<sup>16</sup> Juan J. Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978.

sólo de manera gradual que fueron cimentándose las alianzas con grupos de tecnócratas, empresarios o políticos que prestaban apoyo y contenido a la orientación de las políticas que se proponían imponer. Pero en todos los casos, los militares fueron el componente principal y decisivo de las alianzas gobernantes, y su mayor motivación consistía en reaccionar contra la estructura de poder que habían derrocado <sup>17</sup>.

En todos los casos las coaliciones involucradas en los golpes de Estado se formaron gradualmente en respuesta a presiones que variaban de país a país. Pero en todos ellos, quienes se adherían a estas coaliciones lo hacían movidos por temor al comunismo o a la izquierda, a la violencia social, a la movilización de las masas y a la polarización política. La forma y el peso de cada uno de estos factores variaban de caso en caso, del mismo modo que fue diferente la cadena de acontecimientos que llevó a la decisión final de derrocar al gobierno democráticamente elegido.

En Brasil, los militares, a partir de fines de la década de 1950, habían analizado y evaluado la situación política interna desde su poderosa y prestigiada *Escola Superior de Guerra*. Su enfoque provenía de doctrinas de seguridad nacional que destacaban el rol de las Fuerzas Armadas en la definición del interés nacional, para el cual se postulaban como sus garantes principales. Ellas veían un país cuyas naturales aspiraciones a desarrollarse eran obstaculizadas por un sistema político extremadamente fragmentado, divisiones políticas, instituciones ineficaces y un exceso de partidos políticos. Además, con el ascenso de João Goulart a la presidencia, vieron al gobierno apoyar la movilización de la izquierda, actitud que adquirió ribetes inaceptables —y francamente inconstitucionales— cuando el presidente no presentó

---

<sup>17</sup> Véase Guillermo O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism*, Berkeley, Institute of International Studies, University of California; Paul Cammack, «The Political Economy of Contemporary Military Regimes in Latin America: from Bureaucratic Authoritarianism to Restructuring», en Philip O'Brien y Paul Cammack (eds.), *Generals in Retreat: The Crisis of Military Rule in Latin America*, Manchester, Manchester University Press; David Collier (ed.), *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton University Press, 1979.

oposición a una revuelta organizada por un grupo de suboficiales. Esto se convirtió en el antecedente inmediato del golpe<sup>18</sup>.

En Chile, a su vez, se desarrollaron ideas de seguridad nacional que también concebían unas Fuerzas Armadas con el papel de fomentar la seguridad y la cohesión a partir de una manera específica de concebir el interés nacional. Sin embargo, la idea sobre el tipo de Fuerzas Armadas que se albergaba en el imaginario de la oficialidad contrastaba fuertemente con las Fuerzas Armadas realmente existentes y su realidad de posicionamiento secundario dentro del Estado y el sistema político. Las tensiones insostenibles resultantes de esta disonancia cognitiva en el campo institucional encontraron su expresión a fines de los años sesenta a través de señales de evidente descontento manifestadas en la academia de guerra y, en las postrimerías del mandato de Frei Montalva (1964-1970), a través de la toma del Regimiento Tacna, la guarnición militar más poderosa de Santiago, por un grupo de oficiales rebeldes. Las tensiones fueron aplacadas por un tiempo, pero resurgieron cuando en las elecciones presidenciales de 1970 triunfó Salvador Allende con su coalición de inspiración predominantemente marxista. Los supuestos de Guerra Fría de los que se habían nutrido las visiones de seguridad nacional hicieron aflorar los rasgos más ideológicos y políticos de la confrontación del periodo anterior. La creciente polarización de la sociedad política y civil colocó a las Fuerzas Armadas en el centro de la pugna entre fuerzas políticas antagónicas, cobrándose la primera víctima de la violencia política en casi un siglo: el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, fue asesinado por un grupo de extrema derecha que contaba con el apoyo de la CIA. La polarización extrema que se produjo luego durante el gobierno de Allende, y que envolvió a todas las instituciones, condujo a la politización de los militares —a la cual contribuyó la designación que el presidente hizo de jefes militares a cargos ministeriales— y derivó en la activa campaña por la

---

<sup>18</sup> Alfred Stepan, *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*, Princeton, Princeton University Press, 1971. Véase también *Visões do golpe: a memória militar sobre 1964*, introducción y coordinación de Maria Celina D'Araújo, Gláucio Ary Dillon Soares y Celso Castro, Rio de Janeiro, R. J., Relume Dumará, 1994.

cual la oposición se movilizó en demanda de la intervención militar. Los antecedentes inmediatos del golpe del 11 de septiembre de 1973 fueron una proclama emitida por el Congreso en la que se declaraba la ilegitimidad del gobierno, y la escisión de las más altas jerarquías del Ejército, que ocasionó la renuncia del General Prats, su comandante en jefe. Las Fuerzas Armadas se vieron impelidas a la acción en rescate de una sociedad y un Estado moribundos a causa de la extrema polarización<sup>19</sup>.

Los militares uruguayos también desarrollaron una doctrina de seguridad nacional, todavía más contundente que la de sus pares de la región, desde la cual vigilaban cautelosamente el crecimiento de la izquierda y, peor aún, el accionar eficiente de grupos urbanos armados. Sin embargo, y a diferencia de los casos antes comentados, aquí las Fuerzas Armadas no tuvieron que aguardar el desarrollo gradual de los elementos que dieran pie a una coalición para el golpe antes de clavar su daga en el corazón del sistema político. En lugar de ello, encontraron abierto el camino al poder merced a Juan María Bordaberry, el obsecuente presidente constitucional, quien disolvió el Congreso en 1973, facilitando la instauración de uno de los regímenes autoritarios más militarizados de la región<sup>20</sup>.

En la Argentina, la lucha incesante contra el peronismo después del derrocamiento de Perón constituyó el trasfondo del conflicto político y de la polarización en las décadas de 1960 y 1970. El fracasado intento de unificar la nación bajo la tutela de los militares, iniciado con el golpe que el general Onganía liderara en 1966, condujo a sucesivos cambios en la cúpula estatal y militar hasta que, finalmente, sobrevino lo inevitable: un plan

---

<sup>19</sup> Véase Felipe Agüero, «Militares, Estado y sociedad en Chile: Mirando el futuro desde la comparación histórica», *Revista de Ciencia Política* (Universidad Católica de Chile), XXI (1): 39-65, 2002; Augusto Varas y Felipe Agüero (comps.), *El Proyecto Político Militar*, Santiago, FLACSO, 1984, y Arturo Valenzuela, *The breakdown of democratic regimes: Chile*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1978.

<sup>20</sup> María del Huerto Amarillo, «Participación Política de las Fuerzas Armadas», en Charles Gillespie, Louis Goodman, Juan Rial y Peter Winn (eds.), *Uruguay y la Democracia*, vol. I, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1984.

para el retorno del peronismo y, por último, de Perón mismo. En 1973, el regreso al poder del peronismo, primero con Juan Domingo y luego con María Estela Perón, encerró a la mayor parte de la sociedad dentro de este vasto movimiento, sin importar sus graves divisiones y tendencias sectoriales. La polarización de las diversas ramas del peronismo, todas las cuales tenían cabida en el movimiento y —parcialmente— en el gobierno, alcanzó proporciones insostenibles. La guerrilla urbana inspirada en el peronismo se enfrentó a la represión que, desde un gobierno también peronista, inauguró la siniestra práctica de las desapariciones que luego alcanzó proporciones gigantescas bajo los militares. Un gobierno debilitado e ineficaz, tironado hacia los extremos por las bases que lo sustentaban llevó, en medio de una violencia creciente, al golpe militar de 1976 que, en el pensamiento de las Fuerzas Armadas, habría de salvar al país e iniciar el proceso de reorganización nacional<sup>21</sup>.

Tal como lo demuestran estos casos, la nueva era de regímenes militares que comenzaron en los años sesenta y setenta fueron consecuencia de una dinámica interna propia de las Fuerzas Armadas en estrecha interacción con desarrollos ocurridos dentro de la sociedad y el escenario político. Los analistas han puesto de relieve distintos elementos del complejo conjunto de variables presente en dicha interacción, y los mejores estudios fueron aquellos que lograron representar ese conjunto con fidelidad y elegancia<sup>22</sup>. En sus propias racionalizaciones, los mismos

---

<sup>21</sup> Véase Guillermo O'Donnell, *Bureaucratic Authoritarianism: Argentina, 1966-1973 in Comparative Perspective*, University of California Press, 1988.

<sup>22</sup> Véase, por ejemplo, Guillermo O'Donnell, «Modernización y Golpes Militares: Teoría, Comparaciones y el Caso Argentino», *Desarrollo Económico*, octubre-diciembre, 1972. También Arturo Valenzuela, *El Quiebre de la Democracia en Chile*, Santiago, FLACSO, 1989; José Nun, «The Middle-Class Military Coup Revisited», en Abraham F. Lowenthal y J. Samuel Fitch (eds.), *Armies and Politics in Latin America*, ed. rev., Nueva York, Holmes and Meier, 1986, y los capítulos de los editores en el mismo volumen; David Pion-Berlin (ed.), *Civil-Military Relations in Latin America: New Analytical Perspectives*, Chapel Hill, The University of North Carolina, 2001; Arturo Valenzuela, «A Note on the Military and Social Science Theory», *Third World Quarterly*, 7, 1, 1985.

militares destacaron el papel de las variables contextuales. Para citar un ejemplo, casi siempre veían su intervención como la respuesta inevitable a la crisis, a la incapacidad de la dirigencia civil para enfrentar la situación, o a la corrupción y complicidad de esta dirigencia con la crisis. En otras palabras, los militares sentían el llamado de la patria para dar un paso al frente y salvarla. No obstante, al mismo tiempo, crearon el rol de su propia dinámica institucional, en tanto exacerbaban su sensibilidad a ese «llamado» y su capacidad para actuar en consecuencia, con base en su lectura de la situación a través del lente de la doctrina de seguridad nacional que habían desarrollado<sup>23</sup>.

Cuando los regímenes militares llegaron a su fin, las Fuerzas Armadas participaron sólo de manera esporádica en los debates acerca de las causas que habían provocado los golpes de las décadas de 1960 y 1970, el tipo de gobierno militar que resultó de ellos, o la violencia desatada contra los opositores. En tiempos de democratización, una vez que la intervención y la autoridad militar hubieron perdido legitimidad, los militares prefirieron callar acerca de dichas cuestiones. Su silencio a menudo encontró eco en el que prefirieron guardar los civiles cuyo fracaso político había, de uno u otro modo, influido en el desenlace golpista. Han sido bien escasas las ocasiones en que los militares emitieron opinión acerca de sus pasadas intervenciones, como cuando se sintieron impulsados a dar respuesta a los informes emitidos por las comisiones de verdad. Cuando se decidían a hablar, por lo general tendían a repetir que habían actuado como institución de último recurso, a veces accediendo al pedido de la sociedad para que salvaran a la nación de la decadencia y el caos. Al principio, expresaban su punto de vista asertivamente, ante lo que percibían como amenazas provenientes de grupos civiles que buscaban establecer la responsabilidad que les cupo a los militares y su castigo legal. Más tarde, en aquellos ca-

---

<sup>23</sup> Véase Brian Loveman, *For la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Inc., 1999, y Brian Loveman y Thomas M. Davis, Jr., *The Politics of Antipolitics: The Military in Latin America*, 2.<sup>a</sup> ed. revisada y ampliada, Lincoln, University of Nebraska Press, 1989.

sos en los que los militares decidieron admitir la participación de sus instituciones en crímenes contra los derechos humanos (como ocurrió en Chile y Argentina), lo hicieron poniendo el énfasis en explicitar el contexto social y político en el cual se vieron impelidos a intervenir. Por ejemplo, en 1995, cuando el general Balza admitió la participación de las Fuerzas Armadas, también declaró que «nuestro país vivió una década, la de 1970, signada por la violencia, por el mesianismo y por la ideología. Una violencia que se inició con el terrorismo, que no se detuvo siquiera en la democracia que vivimos entre 1973 y 1976, y que desató una represión que hoy estremece»<sup>24</sup>. En Chile, la Mesa de Diálogo, promovida en 1999 por el ministro de Defensa y que reunió a representantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas, abogados y defensores de los derechos humanos, y otras personalidades, debatió el contexto en el cual se produjo la intervención militar y las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen militar a modo de antecedente para cumplir su función principal: encontrar la manera de dar información acerca de los desaparecidos. La participación del Ejército en el diálogo dio comienzo a un proceso que culminó en el llamamiento al «Nunca Más» pronunciado en 2003 por el general Cheyre, comandante en jefe del Ejército: «Me refiero al nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida»<sup>25</sup>.

En Brasil, los militares también prefirieron el silencio, roto sólo para responder a retos externos. En estas ocasiones, los alestos tendían a defender la legitimidad de la intervención de 1964<sup>26</sup>. Al igual que en todos los otros casos, los militares brasi-

---

<sup>24</sup> Véase la nota 6.

<sup>25</sup> Declaraciones del comandante en jefe del Ejército en el Regimiento núm. 1 Topater de Calama, 13 de junio de 2003. [www.ejercito.cl](http://www.ejercito.cl) (discursos).

<sup>26</sup> Véase la nota 8.

leños siempre han insistido en «dar vuelta la página» y mirar hacia el futuro. En este sentido, fueron ayudados por regímenes políticos de postransición que no se empeñaron lo suficiente en demandar investigaciones. Los militares han sentido que el «revanchismo» venía mayormente de grupos de izquierda, de organizaciones creadas dentro de la sociedad civil, y de los medios, considerando a estos últimos un espacio donde han perdido definitivamente su batalla por establecer la legitimidad de la era militar<sup>27</sup>. Sin embargo, ante la percepción de estas amenazas, las Fuerzas Armadas han hecho muy pocas declaraciones públicas. En este sentido, se encuentran mayores semejanzas entre los casos de Brasil y Uruguay, habiendo este país recibido apoyo adicional para guardar silencio por medio del referéndum de 1989, donde se convalidaba la amnistía otorgada en 1986 a la comisión de crímenes contra los derechos humanos. (Véanse los capítulos de Marchesi y Achugar en este volumen)<sup>28</sup>.

Por lo general, los militares suelen ver la violencia y los crímenes desencadenados durante la represión ejercida durante sus regímenes como una reacción necesaria ante la violencia iniciada por grupos armados (los Montoneros, el ERP, los Tupamaros, el MIR y otros), aunque, como ya fuera explicado, los métodos utilizados por la represión han sido objeto de autocrítica, por lo menos en Argentina y Chile. El grado y las características de la violencia empleada difirieron de un país a otro: en Uruguay, detención y encarcelamiento masivo; en Argentina, asesinato masivo; en Chile, asesinato, tortura y exilio; en Brasil, expedientes masivos recopilados por los servicios de inteligencia sobre los opositores. En Chile y Uruguay hizo falta un elevado nivel de reacción represiva, dado que estos países presentaban organiza-

---

<sup>27</sup> Véase Celso Castro y Maria Celina D'Araujo (orgs.), *Militares e Política na Nova República*, Río de Janeiro, Editora FGV, 2001.

<sup>28</sup> Véase también Carina Perelli, *Desde los cuarteles: el discurso militar sobre la transición*, Montevideo, Peitho, 1991; Alexandra Barahona de Brito, *Human Rights and Democratization in Latin America: Uruguay and Chile*, Oxford, Oxford University Press, 1997; Alexandra Barahona de Brito, Carmen González-Enríquez y Paloma Aguilar (eds.), *The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies*, Oxford, Oxford University Press, 2000.

ciones obreras y partidos de izquierda numerosos y de larga data, y lo mismo sucedió en Argentina, con su vasto movimiento peronista. Brasil tuvo que luchar con una oposición relativamente más nueva, que fue contrarrestada por un amplio sistema de inteligencia militar<sup>29</sup>. A pesar de las diferencias con que los militares en estos países percibieron la amenaza, a la que respondieron con distintas modalidades represivas, existió una visión común sobre los opositores, llegando inclusive a coordinar la represión a nivel regional mediante dispositivos como, por ejemplo, la Operación Cóndor<sup>30</sup>. Sin embargo, las Fuerzas Armadas en estos países han guardado silencio acerca de las políticas represivas específicas puestas en práctica y, respecto de las víctimas, la información proporcionada por los militares resultó de escasa utilidad, salvo en aquellos casos puntuales investigados por los tribunales de justicia. Aun en estos últimos se ofrecieron datos parciales e inexactos, como en el informe confeccionado en Chile por el Ejército a raíz de su participación en la Mesa de Diálogo<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Carlos Acuña y Catalina Smulovitz, «Adjusting the Armed Forces to Democracy: Successes, Failures, and Ambiguities in the Southern Cone», en Elizabeth Jelin y Eric Hershberg, *Constructing Democracy: Human Rights, Citizenship and Society in Latin America*, Boulder, Westview, 1996. Véanse también Karen Remmer y Gilbert Merkx, «Bureaucratic-Authoritarianism Revisited», *Latin American Research Review*, 17, núm. 2 (1982), y Guillermo O'Donnell, «Reply to Remmer and Merkx», *Latin American Research Review*, 17, núm. 2 (1982).

<sup>30</sup> John Dinges, *The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents*, Nueva York, The New Press, 2004.

<sup>31</sup> El ejército chileno entregó oficialmente un informe al Presidente Lagos en enero de 2001 con información sobre el paradero de los restos de cientos de detenidos-desaparecidos, en que se informaba también de algunos de los métodos empleados, como el lanzamiento de esos restos de aviones al mar, ríos cordilleranos y otros lugares. Una buena parte de esta información era inexacta y muchos cadáveres no fueron encontrados —luego se sabría que habían sido desenterrados y removidos por las mismas agencias represoras—. En Argentina no hubo un informe oficial como éste, sólo revelaciones de individuos, como la del capitán Adolfo Scilingo, sobre los vuelos para lanzar detenidos al mar, revelaciones que fueron el antecedente inmediato de la admisión hecha por el general Balza. Véase Horacio Verbitsky, *El Vuelo*, Buenos Aires, Planeta, 1995.

En determinados casos, inclusive durante las dictaduras, se reconoció la existencia de hechos de represión ilegal. En realidad, dicho reconocimiento formó parte de los costos de liberalización o apertura. En Brasil, las primeras etapas de la apertura durante el mandato del presidente Geisel, y luego bajo el de Figueiredo, estuvieron marcadas por tal reconocimiento, expresado, en un puñado de casos, a través de medidas disciplinarias contra los responsables de crímenes durante la represión. En Chile, el hecho de que la ley de amnistía no se aplicara al general Contreras en razón de su responsabilidad en el asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C. y, luego, la renuncia del general Mendoza, miembro de la Junta y jefe de Carabineros, por el papel que las fuerzas a su mando desempeñaron en los asesinatos de opositores al régimen, obedecieron al reconocimiento antedicho. Éstos ocurrieron sólo en estos dos casos de liberalización gradual y prolongada en el tiempo bajo la égida de sus constituciones autoritarias. Nada parecido tuvo lugar ni en Argentina ni en Uruguay, puesto que su tránsito desde el autoritarismo, especialmente en el primero, fue mucho más rápido. Por otra parte, para los regímenes militares de Brasil y Chile, no se trató más que de actos administrativos, desprovistos por completo de una franca admisión de culpa o responsabilidad. Fue sólo recientemente que algunos de estos países vivieron un reconocimiento más genuino y oficial. Los casos presentados en este volumen muestran diferentes resultados y trayectorias respecto de las modalidades utilizadas por los militares para hacer frente al papel que jugaron en la represión. Con sus Fuerzas Armadas más comprometidas con la reflexión y el reconocimiento (que llevaron a las declaraciones de Balza y, más recientemente, las de la Armada Argentina, así como el reconocimiento de responsabilidad institucional en Chile por parte del jefe del Ejército), Argentina y Chile parecen encontrarse del mismo lado, mientras que en el extremo opuesto, los militares de Brasil y Uruguay se han mostrado mucho menos activos. ¿Cómo se explican estas similitudes y diferencias? ¿Cuánto influyen en esas diferencias las características que tuvieron los regímenes autoritarios, o las formas en que se desarrollaron las transiciones? Los modos de transición sin duda influyeron sobre una serie de rasgos de los pro-

cesos de la postransición<sup>32</sup>, pero, en este campo específico —vale decir, en el modo en que los militares han encarado los crímenes contra los derechos humanos— otros factores entran en juego, incluidos los cambiantes contextos de la postransición.

En contraste con los demás casos, la represión en Argentina y Chile tuvo un carácter masivo y brutal, expresado en altos índices de secuestro, tortura y muerte. Es más que probable que ésta constituya una de las variables importantes que explica que, finalmente, los militares de estos países hayan admitido su participación institucional en los crímenes. Y, dado que ambos países muestran diferencias significativas respecto de la manera en que los militares ejercieron el gobierno y transitaron a la democracia, otras variables influyentes deben buscarse en la dinámica política de los cambiantes contextos de la postransición.

Chile alcanzó un tipo de gobierno militar más institucionalizado, que se apoyó en la promulgación de una nueva constitución que proporcionó al régimen mayor estabilidad, unidad y poder en el momento en que debió enfrentar una transición luego del fracaso del plebiscito de 1988 para asegurar la continuidad del régimen. Con una ley de amnistía clara, una constitución sólida que aseguraba a los militares autonomía y tutelaje, y con Pinochet reteniendo el mando del Ejército, quedaba claro que los militares no accederían a los intentos democráticos de revisar y reparar el pasado. Esto se volvió evidente más adelante, cuando el Ejército rechazó el Informe Rettig. El silencio de los militares acerca del pasado había de perdurar a lo largo de los dos primeros gobiernos civiles. Pero cuando las condiciones iniciales de la transición comenzaron a cambiar, los militares tuvieron que reacomodarse. Las circunstancias se modificaron drásticamente con el dramático cambio en la situación de Pinochet, quien de comandante en jefe del Ejército pasó en breve lapso a la condición de prisionero en una clínica londinense, en 1998, formalmente acusado de torturas y secuestros. Al mismo

---

<sup>32</sup> Felipe Agüero, «Legacies of Transitions: Institutionalization, the Military, and Democracy in South America», *Mershon International Studies Review*, 42, 2, noviembre de 1998.

tiempo, las Fuerzas Armadas perdían a dos de sus aliados más fieles y poderosos: el Poder Judicial y la derecha. Los cambios en el Poder Judicial se debieron a un recambio generacional, a nuevos nombramientos realizados por los gobiernos democráticos, y a la reforma judicial. Estos cambios contribuyeron a que los tribunales adoptaran una forma de interpretar los secuestros no resueltos de tal manera que no podía aplicarse la ley de amnistía. Se trataba de casos que seguían abiertos, sin poder determinar la fecha de comisión del delito. Por otra parte, las modificaciones en la dirigencia de la derecha sumadas a consideraciones electorales, llevaron a sus líderes más populares a distanciarse de Pinochet. Los nuevos dirigentes ya no acudirían automáticamente a defender al Ejército. La combinación de estos factores contribuyó a que el ejército intentara reposicionarse, buscando una solución al problema de los derechos humanos y un acercamiento a todos los sectores de la sociedad chilena, intentando recuperar su condición de Ejército al servicio de todos, haciendo énfasis en su neutralidad, alejándose de la herencia del régimen de Pinochet y, finalmente, admitiendo que la institución había participado en las violaciones de los derechos humanos.

En la Argentina, en cambio, los militares se vieron forzados a emprender una transición desde posiciones de debilidad como consecuencia de la derrota militar, las divisiones internas y el caos económico, todo ello sin garantías constitucionales ni jurídicas a excepción de la amnistía que se habían otorgado a sí mismos. Vista en términos comparados, la debilidad de los militares apareció claramente en su incapacidad para impedir la derogación de la ley de amnistía y en el procesamiento —un hecho sin precedentes— de los integrantes de la Junta Militar como una de las primeras medidas del nuevo gobierno democrático. Sin embargo, el vigoroso despegue con el cual este proceso comenzaba a cuajar durante el gobierno de Alfonsín fue perdiendo fuerza, y los militares comenzaron a cobrar nueva confianza, organizando levantamientos y obligando a que fueran sancionadas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego el presidente Menem otorgó el perdón a los miembros de la Junta que habían sido previamente condenados. A estas alturas, parecía que el *modus vivendi* alcanzado entre civiles y militares se

afianzaría con la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil durante el largo gobierno de Menem. Pero la contracara de esta moneda fue que se produjo un estancamiento en lo atinente a las responsabilidades por crímenes contra los derechos humanos. El silencio de los militares acerca del reciente pasado de atrocidades —silencio alentado por funcionarios del gobierno— comenzó a instalarse, al menos en medios de la sociedad política. Pero la confesión pública del capitán Scilingo respecto de su participación en vuelos nocturnos cuyo propósito era arrojar prisioneros al océano rompió el silencio en un gesto tan grave como dramático. Fue éste el episodio que dio pie a que el general Balza declarara el reconocimiento de los crímenes y el papel central desempeñado por los militares. La declaración de Balza también incluía un llamamiento a que los oficiales prestaran declaración, bajo estrictas normas de confidencialidad, a fin de proporcionar información acerca del paradero de las víctimas. Pero su llamamiento cayó en oídos sordos, y dejó la impresión de haber sido un gesto en solitario antes que una manifestación de la institución en su totalidad. La llegada de Kirchner a la presidencia contribuyó decisivamente a redinamizar la escena política en este campo. Se fortaleció la exigencia de derogar las leyes que impedían acciones judiciales contra militares, la que el Congreso asintió y contó luego con la validación de la Corte Suprema. El Presidente obligó a la Armada a presentar su declaración inmediatamente antes de tomar las instalaciones de la ESMA para la futura construcción de un Museo de la Memoria.

Si bien tanto Argentina como Chile acaban de atravesar procesos durante los cuales altos jefes militares, a su modo particular, admitieron la participación de sus instituciones, está claro que las rutas que los condujeron a ese punto fueron bien diferentes, comenzando por las diferencias existentes en los puntos de partida. En Argentina, a pesar de los altibajos, las autoridades civiles empezaron su administración sin impedimentos constitucionales para gobernar sobre los militares, operar sobre los servicios armados, o reducir su número de manera significativa. Tal como queda demostrado en los acontecimientos que involucraron a la ESMA y a la cúpula de la Armada, los militares de rango actuaron siguiendo las órdenes de funcionarios del gobierno. In-

clusivo cuando pronunciamientos como el expresado por Balza en 1995 respondían a una iniciativa propia, quedan dudas acerca del punto hasta el cual lograron —o logran, hoy en día— representar el espíritu de la institución en su totalidad. En Chile, comparativamente, el poder y la autonomía con las que los militares transitaron hacia la nueva democracia les dotó de mayor responsabilidad por sus propios actos y decisiones bajo gobiernos democráticos. Por lo tanto, las medidas tomadas en el ejército al mando del general Cheyre fueron consecuencia de sus propias evaluaciones y cálculo de sus intereses estratégicos antes que de una obediencia renuente a instrucciones impartidas desde arriba.

En última instancia, en ambos países la fuerza y la sofisticación de la red de defensa de los derechos humanos ha constituido un perseverante y continuo factor de fondo durante los años de la dictadura y de la posttransición; un factor clave para que las transformaciones señaladas arriba hayan podido tener lugar. Sin él, es improbable que se hubiera logrado algún progreso en las actitudes con las cuales los militares enfrentaron su reciente pasado represor. A su vez, la persistencia y coherencia de la actividad en defensa de los derechos humanos puede verse como la contraparte del carácter masivo y brutal de las atrocidades cometidas en ambos países.

Otro rasgo en común reside en que las atrocidades masivas cometidas en Argentina y Chile resultaron determinantes para las amnistías que los militares se otorgaron a sí mismos antes de abandonar el poder. Sin embargo, éstos son los dos países donde, al fin y al cabo, las amnistías no cumplieron su cometido, ya sea porque fueron derogadas, como ocurriera recientemente en la Argentina, o porque la forma en la que fueron interpretadas no sirvió para mantener a los militares fuera de los tribunales de justicia, como en el caso de Chile. En cambio, ningún militar brasileño ni uruguayo tuvo que presentarse ante la justicia por crímenes contra los derechos humanos cometidos en el pasado.

En Brasil se les garantizó a los militares que el «revanchismo» que tanto temían no sería permitido. Efectivamente, los militares gozaban de suficiente poder como para obtener dichas garantías durante la transición. Al igual que en Chile, los milita-

res ingresaron a la transición dictando sus términos, bajo la constitución del régimen y la promesa de continuidad en posiciones de poder. ¿Por qué razón estos militares no padecieron un cambio de situación parecido al que exasperó a sus pares de Chile y Argentina? Parte de la respuesta debe encontrarse en el nivel de represión ejercida, comparativamente menor. Naturalmente, los militares brasileños, pioneros de la nueva era de gobiernos autoritarios, fueron los primeros en embarcarse en la represión masiva mediante una sofisticada inteligencia interna y refinados métodos de tortura, que señalaron el camino para las Fuerzas Armadas de los países vecinos. Y aun así, las atrocidades se mantuvieron en niveles más bajos que en los demás países.

Al mismo tiempo, los militares conservaron su sólida influencia durante la transición y los primeros gobiernos civiles, y ejercieron una significativa influencia sobre la nueva Constitución de 1988 mediante considerable presión sobre el Congreso. A pesar de que su influencia había sufrido una notable erosión<sup>33</sup>, especialmente a partir del gobierno de Collor, las Fuerzas Armadas retuvieron importante capacidad de presión, y permanecieron entronizadas en posiciones de poder en la burocracia pública, inclusive después de haber perdido codiciados cargos en el gabinete de ministros. Resistieron la creación del ministerio de Defensa hasta bien entrado el período del presidente Cardoso, para luego controlar la orientación y el ritmo de su implementación. Además —y esto es de suma importancia— las Fuerzas Armadas continuaban siendo indispensables para las crecientes necesidades de seguridad pública interna que acuciaban a la sociedad brasileña. Mientras que en Argentina y Chile las persistentes organizaciones de la sociedad civil y algunos funcionarios de gobierno mantuvieron la presión para demandar responsabilidades en los crímenes del pasado, no sucedía lo propio en Brasil. En realidad, paradójicamente, Brasil fue el único país que creó una Secretaría de Derechos Humanos y un plan nacional para los derechos humanos, pero ambos estaban por completo

---

<sup>33</sup> Wendy Hunter, *Eroding Military Influence in Brazil: Politicians Against Soldiers*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1997.

dedicados a los ingentes problemas del presente en ese campo. En Brasil, los debates sobre derechos humanos han centrado la mirada en el futuro, en contraste con el tenor de las discusiones que se han dado en Chile y Argentina. En tal contexto, a pesar de que los militares se lamentan por haber perdido la batalla de los medios en cuanto a las interpretaciones del pasado, lograron, en términos generales, mantenerse apartados de esos debates, y triunfar, sin que mediaran protestas, en su elección de guardar silencio.

Por su parte, Uruguay fue el único país que realizó su transición política mediante un pacto. Si bien es común mencionar a Chile y Brasil como casos de transición pactada, lo cierto es que, a pesar de acuerdos más o menos formales entre los militares salientes y las élites entrantes, las transiciones de estos dos países ocurrieron bajo los términos constitucionales dictados por los respectivos regímenes autoritarios. No obstante, Uruguay sí sostuvo una negociación formal para la transición —el Pacto del Club Naval—, cuyos artículos más importantes fueron incluidos en el Acta Institucional núm. 19, así como el entendido de que los militares impedirían toda acción legal contra sus oficiales por delitos de violación de derechos humanos<sup>34</sup>. Finalmente, los militares presionaron para que este entendido se convirtiera en ley —la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado— que fue validada por referéndum después de una impresionante movilización para que fuera recusada. Éste ha terminado siendo el único caso de amnistía aprobada en elecciones, proporcionando el contexto institucional decisivo que había de garantizar el silencio de los militares y las actitudes internas, sin cuestionamientos, respecto del papel desempeñado por los militares en la represión.

En última instancia, tal como sucedió con la dinámica que desembocó en el advenimiento de la nueva era de gobiernos autoritarios militares en los años sesenta y setenta, el modo en el que los militares acabaron por enfrentar su pasado represor du-

---

<sup>34</sup> Charlie Gillespie, *Negotiating Democracy: Politicians and Generals in Uruguay*, Nueva York, Cambridge University Press, 1991.

rante las nuevas democracias surgidas después del autoritarismo fue consecuencia de la intensa interacción entre procesos internos en el seno de las instituciones militares y desarrollos cambiantes ocurridos en la política y la sociedad.

## V. CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN LOS HILOS DE LAS MEMORIAS MILITARES: MAPA DEL LIBRO

Al menos tres líneas temáticas generales sobresalen en nuestra revisión de los enfoques militares de la memoria en los distintos casos. Primero, existe una identificación constante de los militares con la nación, comprendida como indivisible y encarnada en imágenes de la patria; ningún costo es excesivo para que las Fuerzas Armadas cumplan con su obligación de protegerla de amenazas externas y de asegurar la paz interior (comoquiera que ésta se defina). Esto es crucial, dado que la experiencia de la represión, siempre y cuando se reconozca que ha sucedido, se contextualiza en consecuencia como una obligación necesaria, a menudo penosa, arraigada en el compromiso de proteger la integridad y seguridad de la nación. Visto así, cuestionar el rol de los militares en estos acontecimientos —negar, por ejemplo, que existieron tales amenazas a la nación o que la represión estuvo dirigida a dichas amenazas antes que al intento de generar un clima de temor generalizado en ciertos segmentos de la población— es muchas veces recibido como un ataque a la institución de las Fuerzas Armadas y como un reto a la nación.

Sin embargo, los modos en los cuales se difunde esta descripción del rol de las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad varía según el momento y el contexto. La interesante contribución de Eva Muzzopappa a este volumen, que se ocupa de la construcción de la memoria en la Escuela Militar de Chile, repasa las estrategias institucionales que pretenden definir (tanto para la Escuela como para la sociedad) misiones institucionales dirigidas al presente y al futuro, a la par que se interroga sobre la complejidad de su pasado. Muzzopappa examina el proceso de socialización a través del cual se pretende que la memoria se transmita

de una generación a otra, pero en vez de analizar a la juventud que creció durante el período signado por la violencia, se centra en el programa de estudios de la academia militar actual, un programa dirigido a los jóvenes nacidos cuando gran parte de la represión ya había cesado. Aquí, como en otros lugares, se fomenta, como objetivo explícito de la socialización de la juventud, un profundo sentido de singularidad, de identidad corporativa separada de otras y, sin embargo, a medida que el medio externo cambia (el arresto de Pinochet en Londres, la creciente atención judicial a los crímenes contra los derechos humanos, etc.), Muzzopappa encuentra que la educación militar se modifica en respuesta a ese nuevo contexto. La suya es una descripción muy lograda de una orientación cada vez mayor hacia adentro del proceso de socialización, de igual manera que en el epílogo, en el que anticipa una constante evolución de la postura oficial tal como aparece en el discurso del «Nunca Más».

Esto nos conduce a la segunda cuestión: a pesar de la continuidad, las posiciones adoptadas por los portadores de la memoria militar varían a través de los años y dependen del público al cual se dirigen. Éste constituye uno de los principales hallazgos de la investigación realizada por Mariana Achugar, cuyo cuidadoso análisis de los textos de una importante publicación militar uruguaya en momentos sucesivos de la dictadura y la democracia subraya la determinación de ese sector de conservar un sentido claro de solidaridad e identidad corporativa, al tiempo que articula los principios lógicos que impulsaron el derrocamiento de las antiguas instituciones democráticas de Uruguay. El núcleo de esta narrativa es que los militares no socavaron la democracia, sino que, de acuerdo con los principios de la doctrina de seguridad nacional, la salvaron de la agresión interna. Si bien el mensaje esencial de los militares se mantiene constante, el lenguaje que utilizan evoluciona con el tiempo, en respuesta al clima político y al estado de las negociaciones o debates acerca de si es necesario reconocer las violaciones de los derechos humanos y, si lo fuera, de qué manera hacerlo. En este caso, como en el que presenta Muzzopappa, se detecta una creciente orientación hacia adentro a medida que las condiciones externas se vuelven más adversas.

En un tenor similar, el estudio comparado llevado a cabo por Aldo Marchesi sobre las reacciones de los militares a los informes de las comisiones de verdad encuentra tendencias análogas de continuidad en medio de cambios renuentes, en tanto las Fuerzas Armadas no consiguen ignorar los nudos cruciales de la memoria que moldean los debates en vastos sectores de un público nacional e internacional. Por supuesto, las respuestas varían entre aquellas relativamente acomodaticias y el *Brasil Sempre*, abiertamente irónico, el cual, representativo o no de la opinión generalizada, claramente constituye una de las múltiples corrientes del pensamiento emergente dentro de las instituciones militares analizadas. De todos modos, lo que llama la atención en la lectura que hace Marchesi es la continuidad relativa, las maniobras limitadas en cuanto a reacciones institucionales a la publicación y difusión de documentos comprensivos que adquirieron un papel central en el debate de las interpretaciones del pasado.

Finalmente, el tercer punto se refiere a las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, pues contrariamente a lo que suponen las nociones populares más simplistas, no existe entre los militares una comprensión monolítica del pasado ni de los intereses futuros. Tal como lo demuestra Priscila Antunes, diferentes facciones de militares brasileños, y la prensa del país que se inclinaba más por unas que por otras, describieron el atentado de 1981 en Rio Centro —momento central durante el régimen militar— de modos diversos, reflejando así las divisiones internas del régimen. Dichas divisiones no sólo continúan destacándose en narrativas del suceso que compiten entre sí, sino que también revelan algo de lo que ocurría detrás del manto de silencio que apartaba las disputas internas de la mirada pública.

Las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas también constituyen el núcleo del relato de Diego Escolar, aunque aquí sus ramificaciones nos llevan a los interrogantes que conforman el aspecto central de la vida política contemporánea en Buenos Aires. Al plantear la pregunta de cómo es posible que la Gendarmería argentina juegue un papel tan importante en la preservación de la seguridad interior en un contexto de protesta social generalizada bajo un régimen democrático (cuando esos mismos

gendarmes, en su condición de miembros del desacreditado aparato militar argentino, tomaron parte en la represión durante la dictadura), Escolar destaca las tensiones en la manera de ver la división de tareas represivas entre los militares en el pasado, y en la que los gendarmes minimizan su rol en la represión mientras subrayan la legitimidad de su posición en el presente. La construcción de la memoria de la Gendarmería, como un elemento diferenciado dentro de la totalidad del sistema militar, resulta esencial para este movimiento, y necesita ser dirigido tanto a los integrantes de la fuerza como —y esto importa más aún— a la sociedad en general.

Como se señalara al comienzo de este capítulo, un fracaso en la disputa por hacer dominante una determinada visión del pasado puede tener grandes consecuencias. Por esta razón, el esfuerzo tendente a buscar el mejor modo de describir lo que ocurrió en las dictaduras sudamericanas está destinado a mantenerse como elemento prioritario para los actores institucionales y los individuos en cada punto del espectro político. Aun cuando los militares no serán los únicos en intentar moldear la memoria social de este doloroso, controvertido período de la historia de la región, seguramente se mantendrán al frente de las constantes luchas por proyectar interpretaciones del pasado. El análisis de sus estrategias y discurso continuará ofreciendo grandes revelaciones acerca de las escisiones que signan la historia de la región, y que definirán la vida política y social en las décadas venideras.